

ENTRE LA LIBERTAD Y EL MIEDO

En el ensayo que nos ha enviado Mario Vargas Llosa, el problema de la deuda latinoamericana es visto, no como el origen sino como un síntoma de nuestros males. La tradición centralista de nuestros países —apoyada en los medios intelectuales por la "teoría de la dependencia"— ha alentado la formación de Estados desmesurados, ineficientes y que han aplastado la libertad creadora de la so-

ciudad civil en el terreno económico. Pero hay síntomas de que "no las élites políticas ni las intelectuales sino los pobres han comenzado ya a reemplazar la cultura del miedo pánico a la libertad en el campo económico por una cultura diferente, moderna, apoyada en la iniciativa individual, el esfuerzo privado y orientado a la creación de la riqueza en vez de al reparto de la pobreza existente."

SEGÚN LA PERSPECTIVA desde la cual se la mire, América Latina ofrece un panorama estimulante o desolador. Desde el punto de vista político, no hay duda que éste es el mejor momento de toda su historia republicana. El reciente triunfo de la oposición al régimen dictatorial del general Pinochet, en el plebiscito chileno, inaugura un proceso de democratización de ese país y es el hito más reciente de una secuencia que ha visto, en las últimas décadas, desaparecer una tras otra a las dictaduras militares y su reemplazo por regímenes civiles nacidos de elecciones más o menos libres. Con la excepción de Cuba y Paraguay, y las semidictaduras de Panamá, Nicaragua y Haití, puede decirse que todo el resto del continente ha optado resueltamente por el sistema democrático. Las pseudodemocracias manipuladas de antaño, como la de México, se van perfeccionando y admitiendo el pluralismo y la crítica. De un lado los ejércitos y, de otro, los partidos de extrema izquierda o de extrema derecha se van resignando, so pena de verse reducidos a la orfandad más absoluta, a las prácticas electorales y a la coexistencia democrática.

Este proceso de democratización política del continente no debe juzgarse sólo en términos estadísticos. Lo más significativo de él es su naturaleza. Es decir, ser un proceso genuinamente popular. Por primera vez en nuestra historia republicana, no han sido las élites, ni la presión extranjera, lo que ha impulsado la instalación de regímenes civiles y democráticos, sino, sobre todo, el pueblo, las grandes masas de mujeres y hombres humildes cansados ya de la demagogia y la brutalidad tanto de las dictaduras militares como de los grupos y partidos revolucionarios. Al igual que las dictaduras de derecha, los guerrilleros y terroristas de izquierda —tan populares en los años sesenta— sufren de falta de credibilidad y de un auténtico rechazo civil. Los que aún actúan —haciendo a veces mucho daño—, como ocurre en el Perú, en Colombia o en El Salvador, representan a minorías violentas que difícilmente podrían acceder al poder a través de procesos electorales.

Todo esto es un claro signo de progreso y modernización y debería justificar el optimismo respecto al futuro de América Latina. Sin embargo, cuando desviamos la vista del campo político hacia el económico, el radiante paisaje se ensombrece y en vez de un horizonte soleado y promisorio divisamos negros nubarrones y los rayos y centellas de una tormenta.

Casi sin excepción, en lo que se refiere a su vida económica, los países latinoamericanos están hoy estancados o retrocediendo. Algunos, como el Perú, se hallan peor de lo que estaban hace un cuarto de siglo. La situación de crisis se repite, casi sin variantes, de uno a otro país, con la monotonía de un disco rayado o de una imagen congelada. Caen la producción y los salarios reales, desaparece el ahorro y languidece la inversión, los capitales nativos se fugan y los procesos inflacionarios renacen periódicamente luego de traumáticos intentos estabilizadores que, además de fracasar casi siempre, golpean duramente a los sectores desfavorecidos y dejan a toda la sociedad desmoralizada y aturdida. Con la excepción de la chilena y, en cierto modo, de la colombiana, que parecen enrumadas en un sólido proceso de expansión apoyado sobre bases firmes y de largo aliento, las otras economías de la región se debaten en la incertidumbre y enfrentan crisis de distinto nivel de gravedad.

¿Cómo explicar esta angustiosa situación? ¿A qué puede deberse que un país como Argentina, que hace medio siglo era una de las naciones más desarrolladas del mundo, haya conseguido subdesarrollarse y ser ahora una de las de economía más caótica y precaria? ¿Y a qué, que el Brasil, gigante que tantas veces parecía a punto de despegar, siempre acaba tropezando y regresando al punto de partida? ¿Cómo es posible que Venezuela, uno de los países más afortunados de la tierra, haya sido incapaz, en todas las décadas de bonanza petrolera, de asegurar su porvenir, y comparta ahora la inseguridad y la zozobra de los países latinoamericanos pobres? (Una aclaración. No estoy diciendo que todas las naciones del continente se hallen en el mismo estado. Algunas capean mejor que otras el temporal, como Colombia o como Paraguay

—aunque en estos dos casos, las razones sean en parte *non sanctas*, como los bien aprovechados dólares del narcotráfico para la primera y los del contrabando para la segunda— en tanto que otras, como el Perú, parecen a punto de ser literalmente devastadas por la crisis. Pero, consignados todos los matices y variables la visión que ofrece la realidad económica de América Latina es lastimosa: la de un mundo que no consigue complementar su clara vocación democrática con políticas imaginativas y pragmáticas que le aseguren el crecimiento económico y social y lo hagan participar cada día más de los beneficios de la modernidad.)

Una de las más típicas actitudes latinoamericanas, para explicar nuestros males, ha sido la de atribuirlos a maquinaciones perversas urdidas desde el extranjero por los ignominiosos capitalistas de costumbre o —en tiempos más recientes— por los funcionarios del Fondo Monetario o, para el caso, los del Banco Mundial. Aunque es sobre todo la izquierda la que insiste en promover esta “transferencia” freudiana de la responsabilidad de los males de América Latina, lo cierto es que semejante actitud se halla muy extendida. También sectores liberales y conservadores han llegado a autoconvencerse de que a nuestros países no les cabe, o poco menos, culpa alguna en lo que concierne a nuestra pobreza y nuestro atraso, pues somos nada más que víctimas de factores, instituciones o personas foráneas que deciden nuestro destino de manera absoluta y ante nuestra total impotencia.

Esta actitud es el obstáculo mayor que enfrentamos los latinoamericanos para romper el círculo vicioso del subdesarrollo económico. Si nuestros países no reconocen que la causa principal de las crisis en que se debaten reside en ellos mismos, en sus gobiernos y en sus mitos y costumbres, en su cultura económica, y que, por lo mismo, la solución del problema vendrá primordialmente de nosotros, de nuestra lucidez y decisión, y no de afuera, el mal no será nunca curado. Más bien, continuará agravándose, lo que tarde o temprano terminaría por poner en peligro la democratización política del continente.

Esto no significa desconocer el papel importantísimo que han tenido en la crisis latinoamericana factores ajenos a nuestro control, como las altas tasas mundiales de interés originadas por el elevado déficit fiscal de los Estados Unidos, los bajos precios internacionales para nuestros productos de exportación y las prácticas proteccionistas de los países desarrollados que nos cierran sus mercados o nos los abren sólo a cuentagotas. Desde luego que todo ello ha contribuido a la situación actual. Como también, y de manera aún más decisiva, la deuda externa. Este problema, en los términos en que actualmente se presenta, plantea a los gobiernos democráticos de América Latina un reto imposible: el de pagar y, a la vez, cumplir con las obligaciones internas, la primera de las cuales es mejorar las condiciones de vida de los pobres o, por lo menos, impedir que empeoren todavía más. Los gobiernos que se han propuesto pagar en los términos exigidos por los acreedores se han visto privados de los recursos indispensables para proveer los servicios más urgentes y para

asegurar la inversión pública. Esto ha provocado, en todos los casos, gran agitación social, emisiones desenfrenadas, inflación galopante, etc. Lo cual no implica que aquellos países que decretaron unilateralmente una moratoria o, como hizo el Perú, redujeron sus pagos a un tope máximo, hayan sacado provecho de semejantes medidas. El gobierno peruano, por ejemplo, dilapidó lo que dejó de pagar en un festín consumista del que ahora el país se conduce amargamente. Esto no redime, por cierto, de corresponsabilidad a los banqueros que, bajo la dudosa premisa de que los países no quebraban, entregaron a los Estados los recursos con una precipitación que jamás se hubieran permitido con clientes privados.

Pero es obvio que dicha situación no puede continuar y que debe haber un acuerdo inteligente y pragmático entre los bancos y los países deudores. Cualquier arreglo del problema de la deuda debería empezar por considerar no el valor nominal de esta deuda, sino el valor real fijado por el mercado. Los acuerdos deberían tener características distintas para cada nación, según las posibilidades reales de sus recursos y, sobre todo, de la voluntad de reforma y superación de su gobierno. Y deberían tener siempre como guía este principio que es tanto ético como político: para poder cumplir con sus acreedores, América Latina necesita crecer. El desarrollo económico es la prioridad política y moral para países donde la extrema miseria, la pobreza, el desempleo, la ignorancia, mantienen todavía a muchos millones de seres humanos viviendo en condiciones que apenas pueden llamarse humanas. Exigir de un gobierno democrático latinoamericano que sacrifique este objetivo a la amortización o pago de intereses de su deuda externa es, simplemente, pedirle que se suicide y abra las puertas a la violencia social, río revuelto del que sólo se benefician quienes quisieran para América Latina un porvenir de dictaduras militares o marxistas (o un híbrido de ambas cosas).

Un país latinoamericano de veras empeñado en progresar no puede romper con la comunidad financiera internacional, como intentó hacerlo, en un arrebato desdichado para el Perú, el presidente Alan García. Estamos a las puertas del siglo XXI, no en la Edad Media ni en el diecinueve, el siglo de las utopías sociales y los nacionalismos a ultranza. Nuestra época es la de la internacionalización de la economía y la cultura, la del mercado mundial de las ideas, las técnicas, los bienes, los capitales y la información. Un país que, en vez de abrirse al mundo, se enclaustra, se condena al estancamiento y la barbarie. El tema de la deuda debe ser negociado dentro de este contexto de indispensable cooperación y de realismo. Que cada país pague lo que puede pagar y que, al mismo tiempo, en razón de la sensatez, el esfuerzo y el sacrificio de que den prueba sus gobiernos, reciba el apoyo y la comprensión internacional. La comunidad occidental debería tener una política discriminatoria y selectiva, para promover la buena causa democrática, solidarizándose con quienes lo merecen y penalizando a los que no. ¿No es justo acaso que un país como Bolivia, que desde hace tres años despliega esfuerzos admirables por poner en orden su hacienda y su vida productiva,

reciba de la comunidad de los países libres concesiones y estímulos que difícilmente pueden justificarse en el caso de regímenes que, contra la razón y la historia, se empeñan todavía en poner en práctica políticas económicas demagógicas e irresponsables que condenan a sus pueblos a la pobreza y el atraso?

Y aquí ponemos, creo, el dedo en la llaga del problema. Por más gravitación que tenga en nuestra crisis económica el tema de la deuda y sus secuelas, no es éste el origen sino más bien un síntoma de nuestros males. La deuda fue contraída y pactada de la manera irresponsable que sabemos a consecuencia de unos hábitos y una mentalidad que tienen todavía una extraordinaria vigencia en América Latina, a pesar de ser cada vez más anticuados e imprácticos, y de estar íntimamente reñidos con la esencia misma de la democracia, que es la libertad. En tanto que en el campo político somos cada día más libres, en el económico y social todavía favorecemos la servidumbre y aceptamos sin protestar que nuestras sociedades civiles vean recortadas sus atribuciones y su responsabilidad por unos Estados omnímodos y enormes que las han expropiado en su favor y nos han convertido a nosotros, los ciudadanos, en seres dependientes y disminuidos.

Se trata de una antigua historia, que el chileno Claudio Véliz ha descrito muy bien, en su libro "La tradición centralista". Sobre el latinoamericano pesa, como una lápida, una vieja tradición que lo lleva a esperar todo de una persona, institución o mito, poderoso y superior, ante el que abdica de su responsabilidad civil. Esta vieja función dominadora la cumplieron en el pasado los bárbaros emperadores y los dioses incas, mayas o aztecas y, más tarde, el monarca español o la iglesia virreinal y los caudillos carismáticos y sangrientos del XIX. Hoy, quien la cumple es el Estado. Esos Estados a quienes los humildes campesinos de los Andes llaman "el señor gobierno", fórmula inequívocamente colonial, cuya estructura, tamaño y relación con la sociedad civil me parece ser la causa primordial de nuestro subdesarrollo económico, y del desfase que existe entre él y nuestra modernización política.

Sin el terreno abonado por la "tradición centralista", en América Latina no hubiera echado raíces tan pronto, ni se hubiera extendido tan rápidamente hasta contaminar con sus tesis a tantos partidos políticos, instituciones y personas, esa corriente de pensamiento, keynesiana en apariencia y socialista en esencia, según la cual sólo la hegemonía del Estado es capaz de asegurar un rápido desarrollo económico. Desde mediados de los años cincuenta, esta filosofía decimonónica comenzó a propagarse por el continente, maquillada por caudalesos sociólogos, economistas y politólogos que la llamaban la "teoría de la dependencia" y hacían de la sustitución de importaciones el primer objetivo de toda política progresista para un país de la región. El ilustre nombre de Raúl Prebich la amparó; la Cepal la convirtió en dogma y ejércitos de intelectuales, llamados (por una aberración semántica) de "vanguardia", se encargaron de entronizarla en universidades, academias, administraciones públicas, medios de comunicación, ejércitos y hasta en los repliegues recónditos de la psiquis de América Latina. Por una extraordinaria paradoja,

al mismo tiempo que en la región surgía una narrativa rica, original, audaz, y un arte genuinamente creativo que mostrarían al resto del mundo la mayoría de edad literaria y artística de nuestro pueblo, en el campo económico y social, América Latina adoptaba, casi sin oposición, una ideología trasnochada que era una segura receta para que nuestros países se cerraran las puertas del progreso y se hundieran aún más en el subdesarrollo. La famosa "teoría de la dependencia" debería ser rebautizada con el título más apropiado de "teoría del miedo pánico a la libertad".

Es importante advertir que esta doctrina no fue —no es— patrimonio de la izquierda marxista o socialista, lo que sería coherente. Nada de eso. Ella ha impregnado profundamente a socialdemócratas y a demócratas cristianos, a conservadores y a populistas e incluso a algunos que se llaman liberales. A tal extremo que, casi sin excepción, puede afirmarse que todos los gobiernos latinoamericanos, civiles o militares, de derecha o de izquierda, de las últimas décadas han gobernado condicionados por sus tesis, sus supuestos y sus sofismas. Este es, a mi entender, el factor número uno de nuestro fracaso económico y el que debe ser corregido porque sólo así podrán superarse los demás obstáculos para el desarrollo de la región.

A la sombra de esta doctrina, los aparatos estatales latinoamericanos han crecido —prácticamente sin excepción— no sólo en tamaño, sino también en injerencia y prepotencia, transformándose en estos lentos, amorfos e ineficientes que, en vez de estimular, traban la creación de la riqueza por parte de los ciudadanos independientes, mediante controles y trámites asfixiantes y a través de una cancerosa corrupción. La "legalidad" se convirtió en un privilegio dispensado por el poder a un costo que, a menudo, la ponía fuera del alcance de los pobres. La respuesta a ello ha sido el surgimiento del sector informal, o capitalismo de los pobres expulsados de la vida legal por las prácticas discriminatorias y antidemocráticas del Estado —patrón. Hay quienes deploran la existencia de estas economías informales por la competencia "desleal" que los empresarios informales hacen a aquellos que operan en la legalidad y pagan impuestos, y proponen reprimirlas. Quienes piensan así confunden el efecto con la causa y quieren suprimir la fiebre preservando el tumor que la provoca. La "informalidad" no es el problema sino el Estado incompetente y discriminatorio que empuja a los pobres a trabajar y a crear riqueza fuera de ese sistema de privilegios y prebendas que es, en nuestros países, la "legalidad". El sector informal es, más bien, un síntoma alentador de cara al futuro, pues significa el principio de la reconquista, por iniciativa de los marginados, de la noción de libertad en nuestra economía.

En la era de la globalización de la historia, cuando los viejos prejuicios nacionalistas cedían, y, por ejemplo, acicateados por el reto de la revolución tecnológica, los países europeos se unían en una gran mancomunidad, y algunas naciones asiáticas, volcándose hacia el mundo y trayendo hacia sí todo lo que el mundo podía ofrecerles para crecer, empezaban a despejar, América Latina hacía como los can-

grejos: optaba, bajo la inspiración de la "teoría de la dependencia", por el nacionalismo y la autarquía. Demagogos de todo matiz, blandiendo fantásticas estadísticas, explicaban a nuestros pueblos que nuestra primera meta no era crecer, prosperar, derrotar el hambre, sino defender nuestra soberanía amenazada por transnacionales, banqueros y gobiernos ansiosos por esquilmarlos. Esta prédica ha prendido. Por lo general, el latinoamericano promedio está convencido de que la inversión extranjera es perjudicial, enemiga de nuestros intereses, y de que lo ideal es que nuestros países, para no ser sometidos y explotados, prescindan de ella.

La famosa defensa de la "soberanía nacional" no sólo ha dificultado e impedido la atracción hacia América Latina de la tecnología y los capitales necesarios para el aprovechamiento de nuestros recursos. Además, ha sido el motivo secreto de que todos los intentos de integración regional de nuestras economías hayan fracasado o languidezcan dentro de una mediocre supervivencia. ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Cómo podrían integrar verdaderamente sus mercados y concertar sus políticas quienes parten del supuesto ideológico de que lo propio es, *siempre*, un valor y lo foráneo, *siempre*, un desvalor? En este contexto cultural tan aferrado a las normas más estereotipadas del nacionalismo romántico del XIX, es difícil, casi imposible, que se abra paso esta sencilla verdad: que mientras un país sea pobre y atrasado, su "soberanía" será un mito, una mera imagen retórica para que los demagogos se llenen con ella la boca. Pues la única manera como un país deja de ser "dependiente" es siendo próspero, de economía sólida y pujante. Para alcanzar este estado no sólo es indispensable la inversión extranjera. También, ser capaces de atraerla y de aprovecharla, con políticas inteligentes y realistas, es decir desprejuiciadas.

La idea —o mejor dicho, el prejuicio— del modelo de desarrollo autárquico, segregado de las otras naciones, bajo la dirección de Estados todopoderosos, de un lado nos ha ido apartando del mundo. De otro, ha obstruido o mediatizado hasta extremos a veces de caricatura, la posibilidad de que en nuestros países funcionen economías de mercado en las que, dentro de reglas estables y equitativas, todos puedan contribuir al objetivo primordial: la derrota de la pobreza mediante la creación de más y más riqueza. La tutela que el Estado se empeña en ejercer sobre todas las actividades productivas, ha hecho que, en la práctica, pese a lo que suelen decir nuestras constituciones —donde la libertad económica acostumbra estar garantizada—, la energía, la imaginación de los productores no se oriente en la buena dirección —la de crear bienes y servicios mejores y más baratos a fin de conquistar al consumidor— sino en la que, dentro de este régimen, es la verdaderamente rentable: asegurarse una de las innumerables concesiones, privilegios o prebendas que dispensa el gran "planificador" que es el Estado.

Estas prácticas no sólo corrompen al Estado; también, a las empresas y a los empresarios. Pero conviene tener en cuenta, a la hora de señalar responsabilidades, las jerarquías en la culpa. La "empresa" está tan satanizada por la cultura política

latinoamericana como el "capital extranjero" y la "transnacional": ella es una de las heroínas de nuestra demonología ideológica. Los "progresistas" han convenido a innumerables latinoamericanos de que una "empresa" y un "empresario" no tienen otras finalidades en la vida que burlar impuestos, explotar a los obreros, sacar dólares a Miami y perpetrar operaciones turbias en complicidad con el Estado. Pocos advierten que si, en muchos casos, ocurre efectivamente así, es por culpa exclusiva de nuestros Estados. Ya que son ellos, y no las "empresas" y los "empresarios", los que fijan las reglas del juego económico y los que deben hacerlas cumplir. Son ellos los que han procedido de tal modo que, a menudo, para una empresa la única manera de tener éxito sea recibiendo privilegios cambiarios o monopólicos y corrompiendo funcionarios, y de que las condiciones de inseguridad sean tales que no haya incentivos para reinvertir en el país y sí para sacar el dinero al extranjero. Son nuestros Estados los que, distorsionando y trabando el mercado, han restado toda clase de estímulos para producir y los han generado, en cambio, para especular. En unas economías de las que ha sido suprimida o desfigurada la libertad por prácticas intervencionistas y controlistas, el verdadero protagonista, el amo y señor de la escena, no es el productor sino el burócrata. Y el libreto que en este escenario se representa es siempre el del idilio de la ineficiencia y la inmoralidad.

Es posible que en esta descripción haya cargado un poco las tintas para hacer más explícito aquello que quería decir. Desde luego que conviene matizar, señalando que no todos los países latinoamericanos adolecen, en idénticas proporciones, del miedo a la libertad en el campo económico, y que no todos nuestros Estados han arrebatado a la sociedad civil, en iguales términos, el derecho y la responsabilidad de la creación de la riqueza. Pero creo que en la mayoría de nuestros países impera aún, en las élites políticas e intelectuales, y sobre todo en aquellas que ostentan —paradójicamente— el título de "progresistas", esta cultura estatizante, controlista, antimercado, nacionalista, que nos impide desarrollar las inmensas reservas de energía y creatividad de nuestros pueblos y nos mantiene —y, a algunos, nos hunde cada día más— en el subdesarrollo.

Es contra esta "dependencia" de una ideología antihistórica e irreal contra lo que debemos luchar si queremos derrotar la pobreza. Y plantar la noción emancipadora de libertad en nuestra vida económica, como lo hemos hecho ya, por fortuna, en el campo político. La primera, la más urgente de las reformas que necesitamos es la del Estado, fuente primera de nuestras deficiencias. La sociedad civil debe asumir la responsabilidad primordial en la creación de la riqueza y el Estado velar porque ella pueda cumplir esta función sin ataduras, dentro de normas estables y promotoras. Nuestras sociedades deben abrirse al mundo, saliendo en busca de mercados para aquello que podemos ofrecer y atrayendo hacia los nuestros lo que necesitamos y podemos adquirir. No sólo debemos privatizar el sector público para librarlo de la ineficiencia y la corrupción que suele afligirlo: debemos

privatizarlo, sobre todo, con una intención social: para que se difunda la propiedad entre aquellos que aún no la tienen. No hay mejor manera de defender la propiedad privada que propagándola masivamente, haciéndola accesible a los trabajadores, a los campesinos y a los pobres. Y no hay mejor manera de que éstos comprendan el vínculo estrecho que existe entre las nociones de propiedad privada, de progreso y de libertad individual.

Contrariamente a lo que dicen las imágenes estereotipadas que sobre América Latina circulan por el mundo, esto ya está ocurriendo. Cuando yo redactaba estas líneas, tuve que hacer un alto en mi trabajo, para ir a expresar mi solidaridad con los vecinos de Atico, un humilde pueblecito pesquero del sur de mi país empeñado en una lucha heroica contra el Estado peruano. ¿Qué es lo que piden esos hombres y mujeres que pertenecen al sector más desfavorecido de la nación? Que la única industria del lugar, una planta de harina de pescado, se privatice. El Perú fue, hace treinta años, gracias a la visión y a la energía de los empresarios y los trabajadores privados, el primer productor de harina de pescado, y, por un tiempo, el primer país pesquero del mundo. La dictadura socializante del general Velasco (1968-1975) estatizó todas esas industrias y, naturalmente, en poco tiempo, la burocracia política que pasó a administrarlas, las arruinó. Algunas debieron cerrar; otras malvivieron gracias al subsidio. Lo que era un emporio de trabajo y de riqueza pasó a ser una carga más para los contribuyentes peruanos.

Pues bien, quienes, con un certero instinto de cuál es el mal y de cómo corregirlo de raíz, se movilizan y combaten por liberar esas industrias de la dictadura estatal y devolverlas a la sociedad civil, no son los políticos, ni siquiera los empresarios, algunos de los cuales —de mentalidad rentista— ven con desconfianza una privatización que traería al mercado libre nuevos competidores con quienes rivalizar por los favores del consumidor. Son los pobres, los pescadores y sus mujeres y sus hijos. Es decir, aquellos para quienes una economía libre no es una meta ideológica, sino, simplemente, la posibilidad de trabajar, de sobrevivir.

Cito este caso del pueblecito de Atico porque no es excepción sino símbolo de un fenómeno que, de modo lento pero firme, va extendiendo en nuestros pueblos la idea de libertad del campo político al económico. Y esto, es preciso recalcarlo, no es obra de las élites, sino principalmente de los pobres, de esos pobres a quienes la urgentísima necesidad de salir de la espantosa pobreza, está haciendo descubrir los beneficios de la libertad en la vida económica como antes, reaccionando contra la arbitrariedad y la violencia, descubrieron las ventajas de la libertad política. Son los pobres los que han creado las industrias y los comercios informales, gracias a los cuales por primera vez surgen en nuestros países —de manera todavía precaria— economías de mercado dignas de llevar ese nombre. Y son los pobres los que en muchos lugares defienden la iniciativa individual, la libertad de comercio y el derecho a la propiedad con más convicción y coraje que las élites.

Quiero citar a este respecto otro ejemplo de mi propio país. Mucho se habla en el extranjero, cuando se trata del Perú, de Sendero Luminoso y sus grandes crímenes perpetrados en nombre de un maoísmo fundamentalista extravagante. Pero se dice muy poco, en cambio, del gran movimiento espontáneo de campesinos supuestamente beneficiados por la reforma agraria de la dictadura de Velasco que cooperativizó las tierras. Pues bien, ese movimiento —llamado de los "parceleros"— ha parcelado o privatizado ya más del 60% de las tierras nacionalizadas. Cientos de miles de campesinos, en los Andes y en la costa peruana, por voluntad propia, en contra del Estado y de todas las élites políticas, han reintroducido el principio de la propiedad privada, rebelándose contra las cúpulas burocráticas que, además de explotarlos tanto o más que los antiguos patronos, llevaron a muchas de las cooperativas y haciendas colectivizadas, al desastre económico. Y hoy día hay, en el campo peruano, aunque el Estado se niegue a aceptarlo, decenas de miles de nuevos propietarios, de nuevos pequeños empresarios.

Por eso, a pesar de las lúgubres cifras que arrojan los termómetros que toman el pulso a la economía de los países latinoamericanos, yo no pierdo la esperanza. Por el contrario. Tengo la convicción de que, así como los pobres del continente han terminado por imponer la democracia liberal en América Latina, contra las opciones extremas de la dictadura militar o la dictadura marxista, ellos acabarán, también, por librarnos de las servidumbres y la inercia que nos impide ser tan creativos en lo que concierne a nuestros recursos como lo somos en las artes y en las letras. No las élites políticas ni las intelectuales sino los pobres han comenzado ya a reemplazar la cultura del miedo pánico a la libertad en el campo económico por una cultura diferente, moderna, apoyada en la iniciativa individual, el esfuerzo privado y orientado a la creación de la riqueza en vez de al reparto de la pobreza existente.

¿Tienen un papel que interpretar en esta historia de la lucha por la libertad en América Latina los organismos financieros internacionales y las empresas privadas de Occidente? Desde luego que sí, y de primer orden. Nuestra disciplina en la política económica y nuestra voluntad de un arreglo adecuado del problema de la deuda, no deben traducirse en que América Latina se convierta en una exportadora neta de capitales. Por lo tanto, corresponde a organismos como el Banco Mundial la tarea de crear mecanismos novedosos, imaginativos, para impedir que ello ocurra. En el pasado, y con frecuencia, estos organismos han contribuido al crecimiento de nuestros aparatos estatales. Ello era inevitable, desde luego, toda vez que la mayoría de sus créditos eran destinados al Estado o canalizados por su intermedio. Pero, en el futuro, ese sistema debería cambiar. El crédito y la inversión deben dirigirse de manera preferente a la sociedad civil y no al Estado, y apoyar de manera decidida todo lo que impulse la transformación de la sociedad en el sentido de la libertad. Para los procesos de reconversión industrial, la tecnificación del agro, la erradicación de la extrema pobreza, el desarrollo de

la pequeña empresa, la capacitación, la desburocratización, la desregulación y tantas otras tareas urgentes, la colaboración es indispensable. Pero para que sea realmente exitosa, es imprescindible que ella propicie y consolide y, en ningún caso, contradiga el avance, en nuestras tierras, de la cultura de la libertad.

Hace cuarenta años, Germán Arciniegas describió en un célebre ensayo —*Entre la libertad y el miedo*— la lucha de los pueblos latinoamericanos por emanciparse de los gobiernos despóticos y corrompidos que asolaban el continente. Esa lucha hoy, en gran parte, está políticamente ganada. Esta es una victoria fundamental, pero insuficiente. Ser libres siendo po-

bres es gozar de una libertad precaria y sólo a medias. La libertad cabal y plena sólo florecerá en nuestra región con la prosperidad, que permite a los hombres plasmar sus sueños y concebir nuevas fantasías. Y para que esta prosperidad, que es todavía el sueño lejano de tantos latinoamericanos, sea posible, es preciso completar la tarea iniciada, perdiendo el miedo y abriéndole a la libertad de par en par todas esas puertas de nuestros países que aún permanecen para ella sólo entreabiertas o cerradas.

Barranco, 18 de octubre de 1988.

© Mario Vargas Llosa, 1988.



Armando Salas Portugal